

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 26° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-12639-2023

CARATULADO : YÁÑEZ/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintidós de Abril de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Comparecen don Hugo Gutiérrez Gálvez, Ramiro Ignacio Gutiérrez Acuña y doña Yolanda Berena Milanca Nahuelhuaique, abogados, todos domiciliados en Paseo Bulnes 216, oficina 901, comuna de Santiago, en representación de don **VÍCTOR HUGO YÁÑEZ VILLALOBOS**, enfermero, domiciliado en calle San Diego 1499, departamento 2201, comuna y ciudad de Santiago, deduciendo demanda en juicio de hacienda de indemnización de perjuicios, en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, domiciliado en Agustinas N° 1225, piso 4°, comuna de Santiago.

Funda su acción en los hechos que se describirán, los que han sido relatados por él:

VÍCTOR HUGO YÁÑEZ VILLALOBOS: *“El día 27 de marzo de 1984, fui detenido a las 09:00 am, se acercan unos tipos de civil y se identifican como de investigaciones, la población que yo vivía fue rodeada por un comando conjunto de carabineros, CNI e investigaciones los cuales asaltaron mi casa por todos lados.*

Me metieron a un auto luego me vendaron los ojos, me esposaron y me hicieron agacharme, de ahí fui trasladado a un cuartel de investigaciones donde fui interrogado y se me despojo de todas mis pertenencias de valor, fueron varias horas en ese lugar, luego de ahí me trasladaron a un subterráneo bajo la moneda donde funcionaba el ministerio de defensa, llamado la llama de la libertad. Dentro del auto me interrogaron y me empezaron a golpear como un animal, con golpes de pies y puños y amenazas verbales contra mi padre que debían haberlo matado el día 11 de septiembre. Estuve ahí aproximadamente 5 horas bajo constante amenazas, luego me trasladaron a un furgón donde habían otros detenidos y posteriormente nos llevaron a una comisaría ubicada en Agustinas con Manuel Rodríguez, ahí me tiraron bajo un escritorio y pude ver a través de la venda solo botas militares, estuve bajo el escritorio varias horas, de ahí me sacaron a golpes y patadas y me tiraron a una celda

esposado y vendado. Dentro de la celda me caí y azoté la cabeza perdiendo el conocimiento, cuando desperté entro un carabinero y dice “este hueon está muerto”. Pase en ese lugar 4 días desaparecido, nadie de mi familia sabía dónde estaba. Llego un señor que dijo que era médico y me pregunto si me habían puesto corriente y me dice “cabro te va hacer bien, no te preocupes”.

Cada vez que se habría la celda entraba un carabinero bueno y uno malo; el malo me colocaba una pistola en la cabeza y la gatillaba pidiéndome que le diera nombre de compañeros, amigos y familiares, lo que fuera, como yo no le daba nombre me golpeaba en la cabeza con la pistola, con golpes de pies y puños esto fue todos los días a cualquier hora. El otro carabinero “el bueno” entraba con restos de comida muy mala y me decía que cooperara que era mejor para mí, este también se enojaba y me daba golpes de pies y puños. Me hacían escuchar como torturaban a otros presos, esto fue durante varios días. Siempre vendado de los ojos y esposado. Un día me sacaron toda la ropa para aplicarme electricidad, me tiraron agua y me dejaron así muchas horas, la venda de los ojos me dejó una cicatriz en la cara, que la tengo hasta el día de hoy.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRKYXNYXRC

«RIT»

Foja: 1

La última paliza fue entre varios carabineros, fue como un callejón oscuro con palos y patadas y golpes de pies. Después de eso me revisó alguien que supuestamente era médico, el cual dijo que no me golpearan más, pues nos iban a entregar a la fiscalía militar con el juez Mann y Michelsen, terminamos en la segunda fiscalía militar y cárcel publica pasando preso alrededor de seis años, hasta el regreso a la democracia, donde fui indultado por el presidente Aylwin.”

Previas referencias al derecho aplicable, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por Responsabilidad Extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar a la demandada al pago, de la suma de \$300.000.000.- al demandante Víctor Hugo Yáñez Villalobos por concepto de daño moral, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa, o en subsidio condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero que estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Con fecha 11 de agosto de 2023, se verificó la notificación de la demanda.

Con fecha 28 de septiembre de 2023, el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, contestó la demanda, previo acogimiento de la excepción dilatoria que se opuso, fundado en primer lugar, en que la indemnización sería improcedente, dado que el demandante ya fue indemnizado, pues la Comisión Verdad y Reconciliación, también llamada Comisión Rettig, propuso una serie de propuestas de reparación, las que fueron recogidas por la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas, estableciendo los siguientes mecanismos: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas. Asimismo y por la ley ya referida, tiene derecho a gratuidad en las prestaciones médicas, entre otros; citando jurisprudencia de las Excm. Corte Suprema que avalaría ello como monto suficiente de indemnización, ya que los mecanismos de reparación buscan compensar los daños a fin de no volver a solicitar indemnización de perjuicios, razón por la que opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados los actores.

En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva, dado que la detención ilegal, apremios y tortura que sufrió el demandante desde el día de su detención, 27 de marzo de 1984, por aproximadamente 6 años.

Por tanto, concluye que desde dicha fecha a la de notificación de la demanda, hecho ocurrido el 11 de agosto de 2023 -considerando suspendido el plazo de prescripción durante el período de la dictadura militar-, la acción se encontraría prescrita, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años, según lo dispuesto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

En subsidio, opone similar excepción alegando lo establecido en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 5 años. Añade, que no existiendo norma expresa, corresponde aplicar el derecho común, siendo prescriptible la acción para perseguir la responsabilidad civil, debiendo establecerse expresamente su imprescriptibilidad, como excepción, lo que no estaría ni siquiera dispuesto en los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile.

En subsidio de las excepciones opuestas, afirma que el monto pretendido es excesivo, atendido que el daño moral no se puede cuantificar; y en subsidio de todo ello, al conceder la indemnización se debe considerar lo ya pagado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRKYXNYXRC

Foja: 1

Afirma que es improcedente el pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes deberían contabilizarse desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, y que mientras no exista tal fallo, no hay mora, por tanto, los intereses, también son improcedentes.

Concluye, pidiendo el rechazo de la demanda, o en subsidio, rebajar sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos.

Con fecha 6 de octubre de 2023, se evacuó la réplica.

Con fecha 19 de octubre de 2023, se evacuó la réplica.

Con fecha 25 de octubre de 2023, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 4 de marzo de 2024, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Hugo Gutiérrez Gálvez, Ramiro Ignacio Gutiérrez Acuña y doña Yolanda Berena Milanca Nahuelhualque, en representación de don Víctor Hugo Yáñez Villalobos, comparecen deduciendo demanda en juicio de hacienda de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco de Chile, y sobre la base de los fundamentos expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, solicitó sea condenado a pagar la suma de \$300.000.000.-, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa, o en subsidio condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero que estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

SEGUNDO: La demandada contestó solicitando el rechazo de la demanda, con costas y oponiendo las excepciones de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor y prescripción de la acción.

I. Algunas consideraciones preliminares.

TERCERO: Que en materia de orden público internacional y según se desprende de lo dispuesto en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se entiende por **norma de ius cogens** “norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internación de Estados en su conjunto que no admite acuerdo en contrario (...)”.

Sobre el particular Regina Díaz Tolosa en su obra “Derecho internacional humanitario y el Derecho penal internacional Especial referencia a su aplicación en Chile” expresa: “*El ius cogens es fuente material del derecho internacional público, fundada en la necesidad de protección de los más esenciales bienes jurídicos de la humanidad, aquellos que permiten que la misma permanezca y no se extinga, a saber: la dignidad humana y la seguridad y paz internacionales*”. Y agrega: “*(...) El ius cogens desplaza en su aplicación a otras normas -internacionales o nacionales- que sean contrarias o anulen sus propósitos en razón de su materia (...) Se incorpora el ius cogens de manera automática a los derechos internos, pues el fundamento tras este tipo de normas coincide con los que cada Estado “civilizado” considera esenciales (...)*” Finalmente indica: “*La jurisprudencia internacional ha destacado que, tratándose de normas de ius cogens, los Estados se encuentran obligados al margen de todo vínculo convencional, por constituir principios de derecho internacional consuetudinario que no pueden ser transgredidos (...) la codificación de las normas de ius cogens -y ciertamente la de cualquier norma internacional- reporta la ventaja de evitar suspicacias respecto de la existencia de las normas, mientras al mismo tiempo dota de precisión su contenido y alcance, haciendo su aplicación práctica más efectiva. Lo importante es, desde un punto de vista teórico, tener claridad en cuanto a que el tratado no constituye o crea la norma de ius cogens, sino solo la asegura, garantiza y promueve*”



CUARTO: Que dentro de las mencionadas normas imperativas de general aplicación se encuentran aquellas que buscan sancionar y reparar los **crímenes más graves que atentan contra la integridad del ser humano**, los que conforme se expresa en el numeral 1 del artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (promulgado mediante Decreto N° 104 de 1 de agosto de 2009) son: a) el genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra; y d) el crimen de agresión.

QUINTO: Que el artículo 7.1 de la mencionada norma internacional expresa que se entiende por **crimen de lesa humanidad** *“cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) el crimen de apartheid; y k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”*

En particular, la tortura consiste en *“causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas”*

En el mismo sentido el artículo 1.1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución 39/46, de fecha 10 de diciembre de 1984 y promulgada por nuestro país mediante el Decreto N° 808 de 26 de noviembre de 1988 expresa: *“(…) se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (…)”*

SEXTO: Que finalmente viene al caso recordar que es deber de los órganos del Estado someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, según el mandato dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, dentro de las cuales se encuentran aquellas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes, al tenor de lo que expresa el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental y a los que se ha hecho referencia en los motivos que anteceden.

II. En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor.

SÉPTIMO: Que la parte demandada fundó la excepción de que se trata en que a través de los distintos mecanismos de reparación que se han establecido a contar del año 1990, el



«RIT»

Foja: 1

demandante ha recibido una serie de beneficios, por lo que su pretensión de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral se encontraría satisfecha.

Acompañó oficio emitido por el Jefe Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, que informa sobre los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante en donde se consigna que figura como víctima de prisión política y tortura.

OCTAVO: Que al efecto cabe consignar que los **programas administrativos de reparaciones** contenidos en la Leyes N° 19.123 y N° 19.980 no constituyen obstáculos para que el Estado cumpla con la obligación internacional de reparación integral del daño, recogido en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos que en lo pertinente expresa: “(...) *se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada*”

De lo dicho se concluye que la solicitud de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral no es incompatible con las cantidades dinerarias que ha recibido y que eventualmente en el futuro recibirá el actor en razón de los mencionados programas administrativos, desde el momento que la determinación de la existencia del daño, la procedencia de su resarcimiento y cuantificación es materia que debe calificarse en esta sede.

Por lo razonado, se desestimaré la excepción en cuestión, según se dirá en lo resolutive.

III. En lo relativo a la excepción de prescripción.

NOVENO: Que el demandado ha opuesto la excepción que se revisará fundado en que la acción ejercida en autos se encontraría prescrita.

En principio, por haber transcurrido en exceso el término de cuatro años que en materia extracontractual dispone el legislador o, en subsidio, el lapso de cinco años que el derecho común dispone al efecto.

El plazo lo computa desde la detención ilegal, apremios y tortura que sufrió el demandante a partir del día 27 de marzo de 1984, por aproximadamente 6 años, –aun considerando suspendido el plazo de prescripción durante el período de la dictadura militar- todo en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

DÉCIMO: Que resulta necesario consignar, como se dijo en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia, que los hechos que motivan la acción indemnizatoria que se conoce en estos antecedentes **emanan de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad**, de modo que la imprescriptibilidad ha de extenderse a la acción civil indemnizatoria.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, si bien los instrumentos internacionales de derechos humanos -Pacto de San José de Costa Rica; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; entre otros- no se encontraban vigentes a la época en que ocurrieron los hechos, lo que podría llevar a que no resulten aplicables; en materia de derecho internacional de derechos humanos y, como se dijo en el considerando tercero de la presente resolución, las normas sobre ius cogens son fuentes materiales de derecho internacional, no pudiendo desatenderse al ser imperativas y de general aplicación para toda la comunidad internacional y, en lo particular, respecto de todo aquello que deriva de la pesquisa y sanción de los autores de delitos contra la humanidad y la reparación de sus víctimas, lo que resultaría imposible de cumplir al restringir a una porción de tiempo el acceso a la justicia para obtener el debido resarcimiento.

DUODÉCIMO: Que según se desprende de la “Norma técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973 – 1990 del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRKYXNYXRC

Foja: 1

Departamento de salud mental de la División de prevención y control de enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud” los trastornos o daños que sufren las personas que fueron sujetos de actos de lesa humanidad surgen con posterioridad, trascendiendo incluso a sus familiares, lo que refuerza el hecho que no puede limitarse a un lapso el derecho de pedir al Estado ser reparados por los actos cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones.

Consecuente con lo dicho, el Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló: *"está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo"* (Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH-ONU), Informe final presentado por el Relator Especial sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993, párr. 135).

DÉCIMO TERCERO: Que sobre la base de los fundamentos anteriores este tribunal considera que la acción deducida en autos no se encuentra sujeta a la prescripción, por lo que se rechazará la excepción que se revisa, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y aquella alegada en subsidio, por lo consagrado en los artículos 2514 y 2515 del mismo cuerpo legal, según se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, la alegación que en esta sede realiza el Fisco, se contradice con la **renuncia tácita de la prescripción** verificada a partir de sus declaraciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso “María Laura Ordenes Guerra y otros respecto de la República de Chile”, al haber expresado que: (...) *las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados (...)*”. De lo anterior se sigue que la demandada ha reconocido su calidad de deudor para con las víctimas de prisión política y tortura, todo en los términos establecidos en artículo 2494 del Código Civil.

En efecto, la sentencia de 29 de noviembre de 2018 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ordenes Guerra y Otros VS. Chile” en su considerando 19 contenido en el acápite “iii. En cuanto a las reparaciones” expresó que: *“El Estado manifestó que, <<al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada>>. Así, <<previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias. No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que*



«RIT»

Foja: 1

*las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tomando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una **acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios**, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una **indemnización monetaria**>>”*
(negrillas del sentenciador)

IV. Respecto al fondo: indemnización de perjuicios en sede extracontractual.

DÉCIMO QUINTO: Que corresponde determinar si en estos autos concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada, a partir de la determinación de la responsabilidad del Estado en la detención ilegal, apremios y tortura que sufrió el demandante a contar del día 27 de marzo de 1984, por aproximadamente 6 años.

DÉCIMO SEXTO: Que para acreditar sus asertos, el actor hizo valer la siguiente prueba DOCUMENTAL:

1. Copia de Certificado de nacimiento de VICTOR HUGO YÁÑEZ VILLALOBOS, cédula nacional de identidad n° 9.255.296-9
2. Copia de Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, emitido el 19 de Julio de 2023, donde se certifica que VICTOR HUGO YÁÑEZ VILLALOBOS, encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo No 1.040 del año 2003 del Ministerio del Interior, conocida como “Comisión Valech I”.
3. Copia de Informe psicológico de Evaluación de Daños Asociados a la Violencia Política, emitido por Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, con fecha 5 de Julio 2023 a VICTOR HUGO YÁÑEZ VILLALOBOS, cédula nacional de identidad n° 9.255.296-9.
4. Copia autorizada de antecedentes de carpeta de don Victor Hugo Yáñez Villalobos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.
5. Copia de Informe elaborado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, titulado “Salud Mental y Violación a los Derechos Humanos”. Junio de 1989.
6. Copia de Informe privado de carácter científico, emitido por profesionales de la Vicaria de la Solidaridad, titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico”.
7. Copia de artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.
8. Copia de artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.
9. Copia de Nómina de personas reconocidas como víctimas. Elaborado por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Donde figura don Víctor Hugo Yáñez Villalobos, demandante de autos, bajo el número 26.799, página 771.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que conforme se acredita del certificado emanado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, resulta efectivo que el actor Víctor Hugo Yáñez Villalobos, fue



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRKYXNYXYRC

«RIT»

Foja: 1

detenido en forma ilegal, sufrió apremios y torturas por efectivos por agentes del Estado a partir de su detención el día 27 de marzo de 1984, por aproximadamente 6 años.

DÉCIMO OCTAVO: Que según se desprende del documento singularizado en el numeral 5 del motivo décimo sexto de la presente sentencia, el demandante presenta secuelas psicológicas perdurables en el tiempo.

DÉCIMO NOVENO: Que en cuanto al demandante, en el informe psicológico por suscrito por la psicóloga doña María Angélica Correa, emitido por Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, se consigna que: *“Se estima que don Víctor Yáñez Villalobos Presenta un trastorno adaptativo depresivo ansioso, con elemento de estrés postraumáticos.*

Sus mecanismos de defensa habrían permitido durante varios años reprimir y controlar en forma parcial los efectos traumáticos experimentados para así preservar su salud mental, pero algunos síntomas siguen presentes y se reactivan periódicamente.

El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que las personas desarrollan tras experimentar eventos de violencia extrema, y esa violencia extrema la vivió don Víctor Yáñez durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, por lo cual, existe un daño físico y psicológico causado por sus vivencia represivas que ha permanecido en el transcurso del tiempo, lo que constituye un trastorno de estrés postraumático crónico.”

VIGÉSIMO: Que, como se dijo, los perjuicios o daños sufridos por la demandante son consecuencia del actuar de agentes del Estado de Chile, el que aparece como responsable directo de sus secuelas psicológicas.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que con lo dicho, se encuentra acreditada la procedencia de la indemnización de perjuicios que se demanda, a modo de reparación integral del daño, por lo que se accederá a aquélla por concepto de daño moral, según se dirá en lo resolutivo.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, como la ha establecido la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, es conocida la dificultad que existe para determinar en forma cuantitativa y económica la compensación del daño moral. Sin embargo, en la necesidad de efectuar su valoración y ante la falta de baremos estadísticos o técnicos suficientemente afianzados, cabe acudir a parámetros que puedan servir como criterios orientadores para esos fines, inspirados en consideraciones de prudencia, de equidad y de experiencia. De igual manera, ha de propenderse a la consideración de datos objetivos –los hechos probados- la naturaleza del daño y la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre la entidad de ese daño y la suma a indemnizar.

VIGÉSIMO TERCERO: Que para la determinación del monto, se tendrá en especial consideración las circunstancias particulares vividas por el demandante.

VIGÉSIMO CUARTO: Que en lo atinente a la alegación de la demandada referida a la improcedencia de reajustes e intereses, debe expresarse que los primeros permiten mantener el valor monetario en el tiempo, de modo que resultan procedentes, desde que se declara la existencia de la obligación, esto es, a partir que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada, habida consideración a que desde esa oportunidad la situación jurídica queda indefectiblemente establecida.

Por lo dicho, la suma fijada en lo resolutivo se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes que preceda al pago.

Que respecto del pago de intereses corrientes, éstos se devengarán desde que el deudor se constituya en mora.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 144, 160, 154, 170, 254, 341, 342, 346, 356 y siguientes 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1437,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRKYXNYXYRC

«RIT»

Foja: 1

1698, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515; 5, 6, 7 y 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República de Chile; Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Convención Americana de Derechos Humanos; Convenios de Ginebra; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, **se declara:**

- I. Que se rechaza la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor;
- II. Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y aquella en subsidio, por lo consagrado en los artículos 2514 y 2515 del mismo cuerpo legal;
- III. Que **se acoge, parcialmente**, la demanda deducida y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile al demandante, don Víctor Hugo Yáñez Villalobos, la suma de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral, más reajustes e intereses según la determinación que se hizo en el considerando vigésimo cuarto de la presente sentencia.
- IV. Que **no se condena en costas** a la parte demandada por no haber sido totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

PRONUNCIADA POR DON RICARDO HUMBERTO CORTES CORTES, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Abril de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRKYXNYXYRC